

Islam político y elecciones en Libia

Sea cual sea el nuevo gobierno, la estrategia de los grupos islamistas de participación en las elecciones va a permitir su acceso a recursos de poder hasta ahora vetados.

Laura Feliu

Cuando se redactan estas líneas todavía no se han hecho públicos los resultados completos de las elecciones legislativas del 7 de julio en Libia, las primeras en 60 años, y se tienen pocos datos sobre las posibles alianzas que deben llevar a la formación del nuevo gobierno interino. En juego están los 200 escaños de la Conferencia nacional general (120 reservados para independientes y 80 para partidos) que deberá organizar las elecciones legislativas de 2013 y la elección de una Asamblea Constitucional. El hecho de que se haya revertido la proporción de escaños reservados para diputados independientes y partidos (tres y dos quintas partes, respectivamente) es interpretado como un intento de evitar que el islam político consiga obtener la mayoría en las elecciones.

De los más de 2,8 millones de libios que se han inscrito en el censo electoral (un 80% del censo posible), finalmente ha votado aproximadamente un 62%. El primer dato que analistas y prensa han destacado es el presunto fracaso de los sectores islamistas en su objetivo de conquistar el poder por las urnas, a diferencia de los vecinos Egipto y Túnez, donde en las elecciones que han seguido a las revueltas los partidos islamistas han sido los claros vencedores. Los resultados parciales apuntan efectivamente a la victoria de la Alianza Fuerza Nacional (AFN), liderada por el exprimer ministro del gobierno de transición Mahmud Yibril, e integrada por sectores liberales e independientes, que se ha hecho con 39 de los 80 escaños reservados para partidos políticos.

Ahora bien, todavía falta por conocerse la adscripción de los 120 diputados independientes, que deberán aliarse con los representantes de los partidos políticos para formar gobierno. Por otra parte, debe reconocerse que el conjunto de los partidos políticos ha aceptado en su discurso el reconocimiento de una base religiosa común, que deberá concretarse a nivel legislativo. E igualmente los sectores islamistas han quedado representados por el Partido de la Justicia y la Construcción, formación cercana a los Hermanos Musulmanes (HM) y dirigida por Mohamed Sawan, que obtiene una alejada segunda posición con 17 di-

putados ; aunque Al Watan, a pesar de las previsiones no ha logrado ningún escaño. Estos dos partidos representan la continuidad de las dos principales tendencias del islam político en Libia.

Los partidos islamistas en Libia

Los Hermanos Musulmanes libios se crearon en los años cincuenta con la llegada al país de un grupo de militantes, entre ellos el egipcio Ezza-din Ibrahim Mustafá, que encontraron refugio político en la Libia de Idris I (Pargeter, 2005), y de profesores egipcios que fueron reclutados posteriormente por las necesidades de alfabetización de la Libia revolucionaria. Pronto se evidenció su posición crítica con respecto al régimen. En 1973 los servicios de seguridad detuvieron a varios de sus miembros, que fueron encarcelados y torturados. El núcleo central de la organización decidió disolverse, aunque la mayor parte de sus miembros continuaron manteniendo el contacto y crearon el Movimiento de la Alianza Islámica (MAI) en 1974 para promover la enseñanza islámica. A principios de los años ochenta, miembros de los HM decidieron revitalizar la organización bajo el nombre de Grupo Islámico Libio (GIL), que desde la clandestinidad atrajo a sectores estudiantiles y de la emergente pero débil clase media, y encontró cierto apoyo en el este del país. Su actividad se centró sobre todo en las actividades caritativas y sociales, y la celebración discreta de reuniones anuales. En los años noventa, miembros asociados al MAI abandonaron este grupo por diferencias relativas a la organización, y algunos de ellos se radicalizaron pasando a militar en el Grupo Combatiente Islámico Libio (GCIL). Los Hermanos Musulmanes han tenido que esperar a la caída de Muamar Gadafi para realizar, el 17 de noviembre de 2011, su primera reunión pública desde los años cincuenta bajo el liderazgo de Suleiman Abdelkader en la ciudad oriental de Bengasi. El 5 de marzo de 2012, los HM se aliaron con figuras islamistas moderadas para formar el Partido de la Justicia y la Construcción

en un acto al que asistieron 1.400 miembros procedentes de 18 localidades.

El segundo partido islámico que al final logró representación en el Parlamento, Al Watan, tiene sus raíces en grupos salafistas *yihadistas* que han evolucionado doctrinal y estratégicamente en los últimos 20 años, y se han aliado con reputadas figuras religiosas. La genealogía del salafismo *yihadista* vincula este partido con el ya extinto GCIL, que se organizó como continuación del grupo clandestino Yihad Islámica, creado en 1982 bajo el liderazgo de Awatha al Zuwwa, un estudiante de derecho islámico de la Universidad de Trípoli que viajó posteriormente a Afganistán en 1986. El grueso de sus militantes marchó a Afganistán, Pakistán y más tarde Sudán. A mediados de 1995, el régimen libio consiguió que Sudán expulsase a los miembros del grupo islámico del país, y una parte importante de los militantes libios regresó a Libia y alimentó las acciones guerrilleras en la región de Bengasi, especialmente en el territorio montañoso de Yebel al Ajdar. Entre 1995 y 1998 se calcula que el GCIL contaba con 2.500 miembros entre sus filas, con una media de edad de 30 años. En 1996 el conflicto escaló con rapidez, y se sucedieron los atentados fallidos contra el propio Gadafi. La respuesta del régimen fue masiva, produciéndose decenas de detenciones y ataques a los supuestos feudos del grupo con todo tipo de medios.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la información en manos de los servicios libios pasó a ser muy valiosa gracias al conocimiento de las redes terroristas en general, al antagonismo con Al Qaeda (Libia emitió una orden de detención de Osama bin Laden ya en 1998), y a la presencia de militantes islámicos libios en el entorno de Bin Laden. Este contexto internacional unido a la pugna en el interior del país entre la vieja guardia y los sectores reformistas alrededor del hijo de Gadafi y su delfín, Saif al Islam, posibilitan un cambio de dirección del islam político libio. En 2008 prisioneros islámicos de diferentes tendencias (HM, GCIL y otros grupúsculos) entablaron negociaciones con el régimen que se prolongan hasta 2011. La lógica de base es la renuncia a las políticas de oposición al régimen y a las armas a cambio de amnistía, y la reinserción social a través de compensaciones económicas y puestos de trabajo. En las conversaciones participan figuras religiosas que ejercen de intermediarios en el proceso (Alí Saalabi o Numan Bin Othmán). Las negociaciones suponen un éxito para el régimen en cuanto los diferentes grupos rectifican su ideario de forma pública, mientras que los sectores islámicos obtienen la liberación escalonada de sus correligionarios entre 1998 y febrero de 2011 (solo unos días antes del inicio de las revueltas). Estos militantes se encontrarán especialmente activos en la guerra civil que sigue a las revueltas de 2011.

Sin duda, las elecciones representan una importante oportunidad de elitización y de acceso a recursos de

poder por parte de los diferentes sectores islámicos. En Libia no se articuló durante el gobierno revolucionario liderado por Gadafi (1969-2011) un gran movimiento islámico con capacidad de representación de una mayoría de la población (Deeb, 1996: 187). Lo mismo se podría afirmar de otros grupos políticos de oposición al régimen. En este sentido, algunos de los factores que han intervenido en uno u otro caso son comunes. En primer lugar, debe destacarse la inexistencia de un movimiento nacionalista fuerte y centralizado. A diferencia de los países vecinos, fueron sectores tradicionales asociados a organizaciones sociales y religiosas como las tribus o la influyente cofradía sanusi quienes lideraron el combate por la independencia. Posteriormente, si bien durante el periodo monárquico de Idris I se creó un Parlamento y el país se dotó de una Constitución, los partidos políticos nunca tuvieron una verdadera rai-gambre (Takeyh, 2000), y con la llegada del régimen revolucionario y la creación de la Yamahiriya en 1977, estos fueron prohibidos.

La represión y la acaparación de recursos provocaron el exilio, o la desmovilización de los aspirantes a constituir la clase política libia. En su lugar, una serie de élites primarias y secundarias se desarrollaron a través de las múltiples y cambiantes instituciones concebidas por Gadafi. Estas instituciones se fueron creando, modificando y suprimiendo tanto en consonancia con el ideario del Libro Verde, redactado por el propio líder, como sobre todo con las necesidades derivadas del control de población y recursos, y de la propia supervivencia del régimen (El Khikhia, 1997: 1; Brady, 2007: 128).

Los sectores islámicos no formaron parte de las élites primarias o secundarias como grupo durante la Yamahiriya, si bien su ideología se encontraba presente en sectores del ejército (aparentemente no entre la oficialidad), en ciertas élites secundarias regionales y tribales, y en una pequeña parte de la débil burguesía creada durante el periodo revolucionario y transformada con el acceso a los negocios privados a partir de los años noventa. Los dirigentes islámicos participaron de forma muy limitada en las relaciones de poder, si bien lo intentaron con respecto al control de la ideología o la violencia.

Las nuevas élites tras la caída de Gadafi

La caída del régimen de Gadafi ha posibilitado la vuelta del exilio de militantes islámicos, pero también de un sector de la población de clase media, del cual se tendrá que comprobar su disposición a pactar con el islamismo o su proximidad al mismo. Las élites islámicas no estuvieron representadas directamente en el gobierno de transición, pero mantienen vínculos cercanos con algunos de sus miembros, y con el que fuera su presidente, Mustafá Abdul Yalil. El fin abrupto del régimen revolucionario implica una importante renovación de élites que, dadas las características del levanta-



El expresidente del Consejo Nacional de Transición libio, Muftah Abdul Yalil, durante la ceremonia de traspaso de poder. Trípoli, 8 de agosto de 2012. /MAHMUD TURKIA//AFP/GTET IMAGES

miento popular con una base territorial muy diferenciada, sigue diferentes lógicas según las regiones y localidades. Resulta evidente que parte del viejo sistema ha sido desmantelado, si bien el tiempo dirá hasta qué punto una parte de las élites primarias del periodo revolucionario han conseguido mantener su posición en la estructura de poder (y, especialmente, en el control de la renta externa procedente del petróleo). A nivel del Estado central, el control de la renta del petróleo (que ya ha vuelto al nivel de producción anterior a la guerra, 1,6 millones de barriles diarios), y su gestión por el Consejo Nacional de Transición ha sido hasta ahora poco transparente, lo que suscita interrogantes en cuanto a su gestión futura.

El nuevo gobierno interino se enfrenta a importantes retos. Por una parte, si bien la revuelta popular contra el régimen de Gadafi fue de carácter transversal (Al-Tir, 2011; citado por Sawani, 2012), la geografía de las revueltas, el proceso seguido por el Consejo Nacional de Transición en la confirmación de su legitimidad, y los acontecimientos posteriores a nivel regional (solicitud de autonomía para la Cirenaica) han probado la relevancia de la representación y lealtad tribal. Los ciudadanos libios continúan sintiéndose vinculados a la adscripción tribal (Chersstich, 2011). A pesar del rápi-

do progreso de una sociedad rural a urbana (más del 80% de la población vive en zonas urbanas), la “tribalización” de las ciudades es también un hecho. Sin duda, dicha adscripción tribal continúa teniendo cierta relevancia para el islamismo, si se observa la importancia del fenómeno en el este del país (donde dominan las tribus Zuwayas, Beni Salim o Awagir).

Por otra parte, una vez finalizada la guerra, el Consejo Nacional de Transición no ha conseguido desmovilizar al conjunto de los entre 120.000 y 200.000 milicianos repartidos por todo el país, y se han sucedido los choques violentos a nivel local entre facciones armadas y soldados del ejército nacional.

Resulta, pues, de vital importancia la creación de un gobierno interino que aglutine a sectores lo más amplios posibles que permitan un anclaje con diferentes grupos, ideologías y regiones. Sea cual sea la composición de dicho gobierno, sin duda la estrategia de los diferentes grupos islamistas de participación en las elecciones va a permitir su acceso a recursos de poder que, hasta este momento, le habían sido vetados y, desde el punto de vista interno, si se confirma su participación en el gobierno, deberá comportar la continuación de su evolución ideológica. ■